Consejo Consultivo de Canarias

D I C T A M E N 2 8 4 / 2 0 2 5

(Sección 2.ª)

San Cristóbal de La Laguna, a 2 de julio de 2025.

Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana en relación *con la Propuesta de Resolución del procedimiento de declaración de nulidad de pleno derecho, instado por (...), en nombre y representación de (...), que, a su vez, actúa en representación de (...), de la liquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, identificada con el número 201015530 (EXP. 245/2025 RO)*[*].

F U N D A M E N T O S

I

1. El presente Dictamen tiene por objeto el análisis jurídico de la Propuesta Resolutoria de un procedimiento administrativo de declaración de nulidad de pleno derecho *ex* art. 217 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria -en adelante, LGT-, promovido por (...), en nombre y representación de (...), que, a su vez, actúa en representación de (...), de la liquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), identificada con el número 201015530, acordada en virtud del Decreto 4780/2020, de 22 de julio.

2. La legitimación de la Sra. Alcaldesa para solicitar el dictamen, su carácter preceptivo y la competencia del Consejo para emitirlo resultan de los arts. 11.1.D.b) y c) y 12.3 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias.

3. Desde el punto de vista sustantivo, resulta aplicable el art. 217.1 LGT y los arts. 4 a 6 del Reglamento General de desarrollo de la Ley, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por Real Decreto 550/2005, de 13 de mayo, por ser normas especiales de preferente aplicación a las normas de procedimiento administrativo común, en virtud de lo establecido en la Disposición Adicional

[*] **Ponente: Sra. Navarro de Paz.**

Primera, apartado 2.a), de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP).

De conformidad con el art. 217.4 LGT, y en garantía de los principios de legalidad y seguridad jurídica, es preciso que el dictamen de este Consejo sea favorable a la nulidad pretendida para que se pueda declarar la citada nulidad del acto que se revisa.

4. El plazo máximo para notificar resolución expresa del procedimiento de revisión de oficio será de un año desde que se presentó la solicitud por la empresa interesada. El transcurso del plazo máximo anterior sin que se hubiera notificado resolución expresa producirá la desestimación por silencio administrativo de la solicitud, al haberse iniciado el procedimiento de declaración de nulidad a instancia de la interesada, según preceptúa el art. 217.6 LGT.

5. El art. 110 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, dispone que es al Pleno de la Corporación a quien compete «*la declaración de nulidad de pleno derecho y la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria, en los casos y de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 153 y 154 de la Ley General Tributaria*».

El art. 37.1.i) de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias (en adelante LMC), establece que son competencias del Pleno: la revisión de oficio de sus acuerdos y disposiciones generales y el art. 31.1.o) de la misma Ley dispone que es competencia del Alcalde la revisión de oficio de sus propios actos nulos. El art. 32 de la citada Ley permite delegar competencias del Alcalde en la Junta de Gobierno Local, Teniente de Alcalde y Concejales, delegaciones que se rigen por la legislación general de régimen local y procedimiento administrativo común.

Todos estos preceptos estatales y autonómicos hay que interpretarlos en términos de complementariedad, para lograr la existencia de un ordenamiento jurídico coherente y evitar su choque o contradicción.

El art. 31.1.y) LMC atribuye al Alcalde la expedición de liquidaciones tributarias y conforme al art. 31.2 de la misma ley esta competencia es delegable.

El Alcalde es competente para revisar de oficio sus propios actos [art. 31.1.o) LMC] y conforme al art. 31.2 de la misma Ley esta competencia es indelegable.

El art. 40.2.d) LMC atribuye a los Concejales del Área la competencia para elevar propuestas de resolución en las materias que le correspondan. No obstante, se deberá respetar, en todo caso, la competencia del Alcalde para resolver el

procedimiento de revisión de oficio, por ser materia de su competencia indelegable por ley [arts. 31.1.o) y 31.2 LMC].

II

En lo que se refiere a los antecedentes de hecho, procede reproducir lo expuesto al respecto en el Dictamen de este Consejo Consultivo 65/2025, de 6 de febrero, emitido en relación con este asunto, en el que se manifestó que:

«Que mi representada interpuso una Solicitud de revisión de actos nulos de pleno derecho y de devolución de ingresos indebidos de la/s liquidación/liquidaciones por el Impuesto Sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (en adelante IIVTNU). Dicha solicitud fue inadmitida o desestimada por esta Administración, dado que la jurisprudencia del Tribunal Supremo que interpreta la Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017 había considerado que las liquidaciones firmes de plusvalías no entran dentro de ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 217.1. de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), de declaración de nulidad de pleno derecho. Por tanto, la liquidación aportada no ha sido revisada a pesar de que es objeto de una transmisión en la que no se produjo incremento del valor del terreno.

Sin embargo, el Tribunal Supremo ha reconsiderado su planteamiento en la reciente STS 339/2024 de 28/02/24, y ha fijado nueva doctrina jurisprudencial, que permite la revisión de las liquidaciones firmes por IIVTNU objeto de transmisiones de inmuebles con decremento del valor de los terrenos al declarar su nulidad de pleno derecho.

La liquidación por IIVTNU correspondiente a la referencia catastral (...) y por importe de 1128,65 ha sido objeto de un procedimiento de revisión iniciado por esta parte mediante escrito cuyo justificante de presentación se adjunta como documento número 1, con el que se han aportado tanto el título de representación que faculta a esta parte a instar de nuevo el procedimiento indicado más adelante, como los títulos de adquisición y de transmisión mediante los que ha quedado acreditado que no hubo incremento del valor de los terrenos en la transmisión de la plusvalía impugnada, por lo que ya están en posesión de esta Administración y no es necesario aportar de nuevo (art. 34.1.h) LGT).

Que no estando conforme con la cantidad abonada ni con la liquidación de la que deriva, impugna de nuevo la citada liquidación dentro del periodo de prescripción y para que sea tenida en cuenta la nueva jurisprudencia, mediante SOLICITUD DE REVISIÓN DE ACTOS NULOS DE PLENO DERECHO y, asimismo solicita su devolución, conforme a los artículos 216.a) y 221.3 de la Ley General Tributaria (LGT) (...) ».

2. Además, la solicitud formulada se fundamenta jurídicamente de la siguiente manera:

«PRIMERA. - INCONSTITUCIONALIDAD Y NULIDAD.

El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2004 (TRLRHL), de 5 de marzo, ha sido objeto de adaptación a la jurisprudencia del Tribunal Constitucionalidad (TC) respecto del IIVTNU por el Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, dado que establecía un sistema de cálculo objetivo para obtener la base imponible del impuesto, basado en el valor catastral del terreno en el momento de la transmisión objeto de dicho tributo, que hacía tributar situaciones en las que no se producía el hecho imponible consistente en un incremento del valor del terreno, o bien sometía a gravamen una plusvalía superior a la real, vulnerando así el principio de capacidad económica y prohibición de confiscatoriedad predicados en el artículo 31.1 de la Constitución Española.

A este cambio normativo se vio obligado el legislador tras la Sentencia del Tribunal Constitucional (STC) 182/2021, de 26/10/2021, que declaró la inconstitucionalidad y nulidad total de los artículos 107.1, 107.2 a) y 107.4, del TRLRHL, creando un vacío normativo desde la emisión de la indicada sentencia hasta la entrada en vigor de la nueva norma arriba mencionada. Esta sentencia no fue la primera que declaraba la inconstitucionalidad de diversos preceptos del TRLRHL, con la diferencia con sus antecesoras, en que lo hacía de forma plena e incondicionada, en cuanto las anteriores limitaron dicha declaración de inconstitucionalidad y consecuente nulidad, para determinados supuestos.

Mediante STC 59/2017 de 11/05/17, se declaró la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1 y 107.2.a) y 110.4 TRLHL en la medida que sometían a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, así como la STC 126/2019 de 31/10/19, declaró la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 107.4 TRLHL en aquellos supuestos en los que la cuota a pagar era superior al incremento patrimonial obtenido por el contribuyente. Con ambas sentencias se evitaba que de la aplicación de las normas impugnadas resultara una cuota tributaria superior a la plusvalía real, dando lugar al gravamen de capacidades económicas inexistentes.

Ahora bien, los efectos temporales de las declaraciones de inconstitucionalidad efectuadas por el Tribunal Constitucional han sido diferentes, de modo que en la STC 59/2017 no hay limitación alguna, no siendo así en las STC 126/2019 y STC 182/2021 que si precisaron las situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en aquellas. Esta limitación, establecida en la STC 126/2019 a las situaciones que no hayan adquirido firmeza por haber sido impugnadas en tiempo y forma, y no haber recaído todavía en ellas una resolución administrativa o judicial firme, fue de forma especialmente intensa en la STC 182/2021, ya que extiende la consideración de situación consolidada, tanto a las situaciones resueltas por sentencias con fuerza de cosa juzgadas como por liquidaciones firmes, las liquidaciones provisionales o definitivas que no hubieran sido impugnadas a la fecha de dictarse dicha sentencia y las autoliquidaciones cuya rectificación no hubiera sido solicitada ex artículo 120.3 LGT a dicha fecha.

Estos efectos temporales han sido objeto de examen en diversas Sentencias del Tribunal Supremo, que se iniciaron mediante SSTS de 18/05/2018, y se fijaron un conjunto de criterios interpretativos sobre la viabilidad de instar la revisión de oficio por nulidad de pleno derecho de liquidaciones firmes por la plusvalía municipal como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad efectuada por la STC 59/2017 (solo revisables mediante los procedimientos especiales de revisión de actos nulos del art. 217 LGT o de revocación de actos anulables del art. 219 LGT), de forma que las liquidaciones firmes del IIVTNU giradas con anterioridad y que hubieran ganado firmeza en vía administrativa no incurrían en los supuestos de nulidad de pleno derecho previstos en el artículo 217.1 LGT.

Sin embargo, el Tribunal Supremo ha reconsiderado su planteamiento a la luz de los pronunciamientos posteriores del Tribunal Constitucionalidad a la STC 59/2017, destacando la declaración de inconstitucionalidad realizada por la STC 182/2021 con plenitud y sin condicionamiento alguno, así como la argumentación empleada en la STC 108/2022 sobre la incondicionalidad del efecto de nulidad ex tunc de la sentencia de inconstitucionalidad 59/2017 sobre los actos administrativos firmes. Ha fijado mediante STS 339/2024 de 28/02/24, la nueva doctrina jurisprudencial que permite la revisión de las liquidaciones firmes por el IIVTNU objeto de transmisiones de inmuebles con decremento del valor de los terrenos (como sucede en este caso) al ser NULAS DE PLENO DERECHO.

(...)

Por tanto, la liquidación firme impugnada incurre en la causa de nulidad de pleno derecho establecida en el apartado g) del artículo 217 de la LGT, con relación, al menos, a la contradicción de normas imperativas según dispone el art. 6.3 del Código Civil, como es y, por consecuencia, debe proceder la Administración a declararla tal nulidad y devolver el importe ingresado indebidamente con los correspondientes intereses de demora.

SEGUNDA. - AUSENCIA DE INCREMENTO DEL VALOR DEL TERRENO.

Esta parte ha acreditado que en la transmisión objeto de la plusvalía impugnada no hubo incremento del valor del terreno mediante la aportación de los títulos de adquisición y transmisión del inmueble en cuestión, y sobre lo que esta Administración no ha ofrecido discusión alguna (...) ».

3. Por último, en lo que a los antecedentes se refiere es preciso reproducir parcialmente lo señalado por la Tesorera municipal en su informe emitido al respecto:

«PRIMERO.- El 11 de mayo de 2017 el Tribunal Constitucional dictó la Sentencia 59/2017, mediante la que estima la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4864- 2016 y, en consecuencia, declara que los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, son inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

La STC 59/2017 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 17 de junio de 2017.

SEGUNDO. - El 8 de junio de 2017 la entidad (...), mediante contrato de compraventa, transmitió el inmueble con referencia catastral (...). El inmueble había sido adquirido por la entidad transmitente el 31 de marzo de 2014 (Adjudicación en el procedimiento de ejecución hipotecaria 1294/2012 tramitado por el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de San Bartolomé de Tirajana).

TERCERO. - El 29 de junio de 2017 la entidad (...), en el plazo de los 30 días hábiles señalados en el artículo 110.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (TRLRHL) y mediante letrada-representante, declaró la transmisión del inmueble a efectos dar cumplimiento a la obligación establecida en el apartado 1 del artículo 110 del TRLRHL.

En su escrito de declaración, el sujeto pasivo, no alegó la inexistencia de incrementó de valor del terreno, a pesar de que la STC 59/2017 de 11 mayo ya había sido objeto de publicación.

(...)

QUINTO. - El 22 de julio de 2020 se acordó, mediante decreto del Concejal Delegado de Hacienda, la aprobación de la práctica de la liquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) al sujeto pasivo (...), con NIF (...). La liquidación por importe de 1128,85 euros quedó identificada con el número 201015530 y fue notificada al obligado tributario el 5 de agosto de 2020.

SEXTO. - El sujeto pasivo no interpuso recurso reposición contra la liquidación practicada, deviniendo la misma en firme y consentida el 6 de septiembre de 2020.

La obligada tributaria tuvo la oportunidad de alegar y acreditar, bien en el momento de la declaración de la transmisión del terreno, bien durante el plazo de interposición del recurso de reposición, la inexistencia de incremento de valor del terreno.

La interesada no ejercitó el derecho a impugnar la liquidación cuando habían transcurrido más de tres años desde el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la no sujeción al Impuesto en las transmisiones de terrenos respecto de los cuales se constate la inexistencia de incremento de valor, y por tanto su expulsión del ordenamiento jurídico, y hacía más de dos años que el Tribunal Supremo había indicado que lo que había sido expulsado del ordenamiento jurídico era la presunción iuris et de iure de existencia de incremento de valor del terreno urbano transmitido, pero no la presunción iuris tantum de existencia de una plusvalía en la enajenación del inmueble, y que la determinación y prueba de la inexistencia de una plusvalía gravable y la comunicación a la Administración de los

datos relevantes para la cuantificación de la deuda tributaria era tarea que correspondía al obligado tributario.

SÉPTIMO. - No ingresada la deuda en periodo voluntario de pago la deuda fue apremiada el 7 de octubre de 2020. La providencia de apremio se notificó a la entidad deudora el 15 de octubre de 2020 y no fue objeto de impugnación, deviniendo en firme y consentida.

OCTAVO. - El obligado tributario realizó el ingreso de la deuda tributaria el 23 de marzo de 2021, conforme a los siguientes importes:

PRINCIPAL	*RECARGO*	*INTERESES*	*COSTAS*	*TOTAL.*
1128,65	*225,73*	*20,52*	*0,49*	*1375,39*

NOVENO. - La entidad interesada solicitó el 15/12/2022 la iniciación del procedimiento de revisión de actos nulos de pleno derecho y la subsiguiente devolución de ingresos indebidos. La entidad interesada alegó que el fallo de la sentencia 59/2017, de 11 de mayo de 2017, dictada por el Tribunal Constitucional le resultaba de aplicación porque lo contrario supondría una infracción del artículo 14 de la Constitución, al recibir un trato diferente a efectos de obtener devolución de ingresos las liquidaciones frente a las autoliquidaciones.

La solicitud se inadmitió mediante Decreto de fecha 21/02/2023 por carecer manifiestamente de fundamento, al no concurrir circunstancia alguna del artículo 217.1 de la Ley General Tributaria. A mayor abundamiento se indicó la jurisprudencia establecida en la sentencia dictada por la Sección 2ª de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, número 1559/2022, de 23 de noviembre, que había resuelto sobre la cuestión planteada por el interesado relativa a la posible infracción del artículo 14 de la Constitución, en lo relativo a los diferentes regímenes de impugnación de las liquidaciones y autoliquidaciones, dejando claro que la diferencia de trato entre las posibilidades de revisión existentes en una y otra situación se fundamenta justamente en la diferente naturaleza de los actos de aplicación de los tributos que son objeto de revisión actos firmes y consentidos en un caso, actos de naturaleza estrictamente privada en el otro.

La resolución de inadmisión de 21/02/2023, que puso fin a la vía administrativa, no fue objeto de impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa, deviniendo en firme y consentida.

DÉCIMO. - El 28 de febrero de 2024, el Tribunal Supremo dicta la sentencia 339/2024, fija nueva doctrina jurisprudencial en relación con las liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana practicadas con anterioridad a la Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017, de 11 de mayo, y que hubieran adquirido firmeza con anterioridad a su publicación:

"Todo ello nos lleva a establecer como doctrina jurisprudencial, en los términos que resultan de los anteriores fundamentos jurídicos, que la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1 y 107.2.a) y 110.4 de la LHL efectuada por la STC 59/2017, de 11 de mayo, traslada los efectos de nulidad de estas normas inconstitucionales a las liquidaciones tributarias firmes por Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que, con aplicación de dichas normas inconstitucionales, hubieran determinado una ficticia manifestación de capacidad económica, y sometido a gravamen transmisiones de inmuebles en las que no existió incremento del valor de los terrenos, con vulneración del principio de capacidad económica y prohibición de confiscatoriedad proclamados en e artículo 31.1 C. Estas liquidaciones firmes pueden ser objeto de revisión de oficio a través del procedimiento previsto en el artículo 217 de la Ley General Tributaria, por resultar de aplicación el apartado g) del apartado 1, en relación con lo dispuesto en los artículos 161.1.a) y 164.1 CE y 39.1 y 40.1 LOTC, todo ello con los límites previstos en los 164.1 CE y 40.1 LOTC, que impiden revisar los procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que se haya hecho aplicación de las normas declaradas inconstitucionales.

Con esta doctrina jurisprudencial revisamos y modificamos la establecida en las sentencias de esta Sala y Sección de 18 de mayo de 2020, números 435/2020, 436/2020 y 454/2020 y, las demás que las reiteran."

DECIMOPRIMERO. - El 07/05/2024 (...), en base a la STS 339/2024 de 28 de febrero, instó el inicio del procedimiento de nulidad de pleno derecho de la liquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, identificada con el número 201015530 (importe: 1128,85 euros)».

III

1. En lo que a la tramitación del presente procedimiento administrativo se refiere, constan en el expediente debidamente documentadas las siguientes actuaciones de interés:

- El día 7 de mayo de 2024 se presentó la solicitud de revisión de oficio, como ya se ha manifestado.

- Posteriormente, el día 5 de agosto de 2024, la Administración le requirió a la interesada diversa documentación que se presentó en tiempo y forma al día siguiente (título de adquisición del bien inmueble en cuestión).

- El día 27 de septiembre 2024 el Concejal de Hacienda, previo informe de la Tesorera municipal dictó resolución por la que acordó admitir a trámite la mencionada solicitud y le otorgó a la interesada trámite de vista y audiencia,

presentado escrito de alegaciones el día 14 de octubre de 2024, de similar contenido a su solicitud inicial.

- Además, se emitió Propuesta de Resolución, cuya fecha de emisión se desconoce.

- Asimismo, la Sección II de este Consejo Consultivo, en sesión celebrada el día 19 de diciembre de 2024, acordó requerir al Ayuntamiento diversa documentación y la emisión de un informe complementario en los siguientes términos:

«Por tanto, se le requiere a la Administración el envío a este Consejo Consultivo del informe del órgano competente por el que se ilustre acerca de la identificación exacta de la vivienda, de las 36 de las que consta el edificio, a la que se corresponde la liquidación que nos ocupa, especificando el valor de adquisición y el de transmisión de esa vivienda en concreto (de acuerdo con la documentación que haya aportado la interesada a la Administración), su referencia catastral y el número de finca registral de tal vivienda».

Pues bien, la requerida documentación se remitió a este Consejo Consultivo los días 15 y 16 de enero de 2025, entre ella obra un nuevo informe de la Tesorería General, en el que se manifiesta acerca de la información solicitada por este Consejo Consultivo lo siguiente:

«PRIMERO. - El objeto de la transmisión realizada el 8 de junio de 2017 fue el edificio en construcción de 36 viviendas y 36 plazas de garaje de la calle (...), tal y como se indica en la página 48 del título de transmisión (Escritura de compraventa de 8 de junio de 2017). En la página 49 de la citada escritura se señala que la licencia de edificación se encuentra caducada, pero que a la fecha de la escritura no se ha iniciado el procedimiento para declarar la caducidad, y que la parte compradora es conocedora de la situación de deficiente conservación de la finca.

SEGUNDO. - La referencia catastral del inmueble (...) se correspondía con la parcela en la que se construía el inmueble.

TERCERO. - El certificado de final de obra se emitió el 1 de junio de 2018, un año después de la transmisión.

CUARTO- Los acuerdos catastrales, mediante las que se dio de baja la referencia catastral del inmueble (...) y se dieron de alta las referencias catastrales relativas a las 36 viviendas se acordaron el 2 de noviembre y con efectos desde el 1 de junio de 2018.

QUINTO. - Conforme a lo anterior, la liquidación del impuesto practicada nº número 201015530, se corresponde con la transmisión de la parcela con referencia catastral del inmueble (...) con obra en construcción.

SEXTO. - En cuanto a los valores de adquisición y transmisión del inmueble, conforme a los correspondientes títulos, el precio de adquisición fue de 2.447.974,14 euros y el de transmisión de 500.000 euros».

2. Tras ello, se emitió el ya referido Dictamen de este Consejo Consultivo 65/2025, de 6 de febrero, por el que se solicitó la retroacción de las actuaciones con la finalidad de que se emitiera un informe por el órgano competente contestando a diversas cuestiones.

Así, el 25 de marzo de 2025 la Tesorería General del Ayuntamiento emitió un informe con el siguiente contenido:

«PRIMERO. - Ateniendo a la necesidad que señala el Consejo Consultivo de Canarias de que por el órgano competente del Ayuntamiento se emita un informe por el que se ilustre acerca de la identificación exacta de la vivienda, de las 36 de las que consta el edificio, a la que se corresponde la liquidación, especificando el valor de adquisición y el de transmisión de esa vivienda en concreto, su referencia catastral y el número de finca registral de tal vivienda, debe indicarse:

1º.- El 8 de junio de 2017 la entidad (...), mediante contrato de compraventa, transmitió el inmueble con referencia catastral (...). El inmueble había sido adquirido por la entidad transmitente el 31 de marzo de 2014 (Adjudicación en el procedimiento de ejecución hipotecaria 1294/2012 tramitado por el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de San Bartolomé de Tirajana).

2º.- El inmueble con referencia catastral (...), localizado en la calle (...), en el momento de la transmisión, se corresponde con un edificio en construcción integrado por 36 viviendas identificadas con las fincas registrales del nº 50622 al 50657 (ambos inclusive). Cuyo valor catastral es de 43.342,91 euros.

Según adjudicación en procedimiento de ejecución hipotecaria 1294/2012, (...), adquirió el edificio el 31 de marzo de 2014 por un valor total de 2.447.911,14 euros (2.013.974,14€ principal e intereses ordinarios a fecha 09/06/2012; 353.955,96€ intereses moratorios; y 79.981,04€ costas procesales) adquiriendo la totalidad del edificio; esto es, las 36 fincas registrales integradas. Realizando la transmisión del mismo edificio en construcción, mediante escritura de compraventa de fecha 8 de junio de 2017, por un importe total de 500.000,00€, correspondiendo igualmente a las 36 fincas registrales integradas en la referencia catastral antes expuesta.

No es hasta el 1 de junio de 2018 cuando se emite el certificado final de obra del edificio objeto de transmisión.

3º.- La liquidación del IIVTNU practicada e identificada nº 201015530, cuyo importe se determinó en 1.128,85 euros, corresponde a la transmisión, como un todo, del terreno con

edificio en construcción situado en la calle (...) A e identificado con la referencia catastral (...), integrado a las 36 viviendas (fincas registrales del nº 50622 al 50657 -ambos inclusive), no a una finca registral determinada de las 36 en que se encontraba dividido registralmente el edificio en construcción. Los datos catastrales del inmueble situado calle (...) e identificado con la referencia catastral (...), se correspondían a la fecha de la transmisión con la parcela del terreno, describiéndose como suelo con valor catastral 43.342,91 euros, los datos correspondientes a edificaciones en construcción no se incorporan al Catastro mientras la obra no se encuentre finalizada, no se incorporan edificaciones en construcción.

SEGUNDO.- Conforme a la conclusión del dictamen del Consejo Consultivo de Canarias de 6 de febrero de 2025, con registro de entrada en el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana el 10 de febrero de 2025, el Concejal Delegado de Hacienda, Gestión, Recaudación e Inspección Tributaria deberá acordar la retroacción de las actuaciones al momento previo al otorgamiento de trámite de vista y audiencia a la empresa interesada, dar traslado a la entidad interesada del presente informe y dar audiencia al interesado durante 15 días, a fin de que pueda alegar y presentar los documentos y justificantes que estimen pertinentes con carácter previo a que se formule una nueva propuesta de resolución al Pleno del Ayuntamiento sobre la solicitud de nulidad de pleno derecho de la liquidación del IIVTNU instada».

Posteriormente, el día 27 de marzo de 2025 se dictó un Decreto por el que no solo se acordó retrotraer las actuaciones, sino que se le otorgó el trámite de vista y audiencia la interesada, que presentó escrito de alegaciones el día 15 de abril de 2025.

Finalmente, se emitieron el día 25 de mayo de 2025 un primer Informe-Propuesta de Resolución y la Propuesta de Resolución definitiva, ambos de sentido estimatorio, considerándose procedente la revisión de oficio solicitada por la interesada, por las razones que se expondrán posteriormente.

IV

1. En la Propuesta de Resolución objeto del presente Dictamen, se declara lo siguiente:

«Conforme a todo lo anteriormente expuesto y en particular a los antecedentes de hechos, fundamentos de derechos y a la conclusión formulada de la Sra. Tesorera Municipal en el informe emitido el 20/05/2025, el Concejal-Delegado de Hacienda, Gestión, Recaudación e Inspección tributaria, Nuevas Tecnologías y Administración Electrónica, Régimen Interno y Patrimonio, en uso de las atribuciones que le están conferidas por Decreto Nº 4634, dictado por la Alcaldía Presidencia de fecha 17/06/2023, y por la vigente Ley

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y demás normativa concordante de general y pertinente aplicación, PROPONE AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA DE TIRAJANA ESTIMAR LA SOLICITUD presentada el 07/05/2024, por (...), con D.N.1 28.772.586-T, en representación de (...) con NIF (...), entidad que actúa en nombre y representación de (...), con NIF (...), y en consecuencia acordar:

PRIMERO. - Declarar la nulidad de pleno derecho de la liquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, girada por transmisión del inmueble con referencia catastral 6392618DR5769S0001P, identificada con el número 201015530 (importe: 1128,85 euros), aprobada mediante decreto del Concejal Delegado de Gestión Tributaria, nº 4780, el 22/07/2020.

SEGUNDO. - La devolución, en concepto de ingreso indebido, del importe abonado en pago de esta, esto es, 1.375,39 euros, así como el interés de demora devengado desde el 23/03/2021 hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución».

2. En lo que se refiere a la cuestión de fondo, en la Propuesta de Resolución se señala que:

«PRIMERO. - La jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación con los efectos derivados de la STC 59/2017 de 11 mayo, había venido indicando hasta su sentencia de 339/2024 de 28 de febrero de 2024, que las liquidaciones del 1/VTNU giradas con anterioridad a la citada sentencia del Tribunal Constitucional que hubieran ganado firmeza en vía administrativa no incurrían en los supuestos de nulidad de pleno derecho previstos en el artículo 217.1 LGT.

SEGUNDO. - La Sección de admisión del Tribunal Supremo, en su auto de 20 de julio de 2023, apreció que presentaba interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, la siguiente cuestión:

«Reafirmar, completar, matizar o, en su caso, corregir la jurisprudencia en virtud de la cual la declaración de inconstitucionalidad contenida en la STC 59/2017 de 11 mayo no determina que las liquidaciones del 1/VTNU, giradas con anterioridad y que hubieran ganado firmeza en vía administrativa, incurran en los supuestos de nulidad de pleno derecho previstos en el artículo 217.1, letras a), e), f) y g), de la LGT, todo ello a la luz de la STC 108/2022, de 26 de septiembre"

TERCERO.- La respuesta a cuestión admitida en el Auto de 20 de julio de 2023 ha sido resuelta por el TS en su sentencia de 28 de febrero de 2024, el Alto Tribunal ha modificado su propia jurisprudencia en relación con la nulidad de las liquidaciones firmes del 1/VTNU dictadas con anterioridad a la STC 5912017, señalando que no cabe sostener una interpretación jurisprudencia/ que conduzca al resultado de limitar aquello que la Constitución impone, y por ello, cuando el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad de una ley y al mismo tiempo no determina nada sobre los efectos

temporales de esa declaración, la regla aplicable es la retroactividad, la remoción de efectos, y ese efecto se reconduce a la categoría de nulidad. Asimismo, establece el Alto Tribunal fija, en su Fundamento de Derecho Undécimo, la siguiente doctrina:

"Todo ello nos lleva a establecer como doctrina jurisprudencial/, en los términos que resultan de los anteriores fundamentos jurídicos, que la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1 y 107.2.a) y 110.4 de la LHL, efectuada por la STC 59/2017, de 11 de mayo, traslada los efectos de nulidad de estas normas inconstitucionales a las liquidaciones tributarias firmes por Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que, con aplicación de dichas normas inconstitucionales, hubieran determinado una ficticia manifestación de capacidad económica, y sometido a gravamen transmisiones de inmuebles en las que no existió incremento del valor de los terrenos, con vulneración del principio de capacidad económica y prohibición de confiscatoriedad proclamados en el artículo 31.1 de la CE.

Estas liquidaciones firmes pueden ser objeto de revisión de oficio a través del procedimiento previsto en el artículo 217 Ley General Tributaria, por resultar de aplicación el apartado g) del apartado 1, en relación con lo dispuesto en los artículos 161.1.a) y 164.1 CE y 39.1 y 40.1 LOTC, todo ello con los límites previstos en los artículos 164.1 CE y 40.1 LOTC, que impiden revisar los procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que se haya hecho aplicación de la normas declaradas inconstitucionales.

Con esta doctrina jurisprudencial/ revisamos y modificamos la establecida en las sentencias de esta Sala y Sección de 18 de mayo de 2020, números 435/2020 (rec. 1665/2019 -ECLI:ES:TS: 2020:973), 436/2020 (rec. 2596/2019 - ECLI:ES:TS: 2020:970) y 454/2020 (rec. cas. 1068/2020 - ECLI ES:TS: 2020:984), y las demás que las reiteran."

Conforme al marco jurisprudencia/ señalado, la Tesorera Municipal propuso la desestimación de la solicitud de nulidad en su informe de 23 de enero de 2025, porque la TS de 28/02/2024 modificaba y fijaba nueva doctrina en relación a revisión por el procedimiento de nulidad de pleno derecho en relación a las liquidaciones practicadas con anterioridad a la publicación de la STC 59/2017, pero que no señalaba que la misma fuese extensible a las que fueron practicadas con posterioridad, cuando los artículos 107.1 y 107.2.a) y 110.4 ya eran objeto de aplicación conforme a doctrina del TC, esto es, sin someter a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor, permitiendo al sujeto pasivo alegar y acreditar ante la Administración Tributaria dicha situación, tanto en el momento de declaración de la transmisión del terreno (Art 11O TRLRHL), como durante el plazo de un mes, tras la notificación del acuerdo de aprobación de la liquidación, para la interposición del recurso de reposición (Art 14 del TRLRHL).

CUARTO.- El pasado 21 de abril de 2025, la Sección 2ª de la Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, del Tribunal Supremo ha dictado la ST 457/2025, en la

resolución del Recurso 2754/2023, frente a la desestimación presunta de una solicitud de revisión de oficio y de devolución de ingresos indebidos, relativa a una liquidación del impuesto IVTNU que había adquirido firmeza en vía administrativa y había sido girada dos años después de STC 59/2017, señala en su fundamento jurídico tercero, que en aplicación del criterio jurisprudencia/ establecido en la STS núm. 339/2024 procede la revisión de la liquidación del 1/VTNU, indicando que la mencionada sentencia ha supuesto un cambio de criterio del Tribunal Supremo, porque admite que se pueda instar el procedimiento de nulidad de pleno derecho frente a liquidaciones firmes, al amparo del artículo 217.1. g) LGT.

Así pues, conforme a la citada sentencia de 21 de abril de 2025, debe concluirse ahora, sin lugar a duda, que la jurisprudencia establecida por la STS núm. 339/2024 se extiende a las liquidaciones anteriores y posteriores a la STC 59/2017 en las que queda acreditado la inexistencia de incremento de valor del terreno entre el momento de la adquisición y el momento de la transmisión.

En el presente caso, atendida la jurisprudencia establecida por el TS en las citadas sentencias núm. 339/2024 de 28 de febrero de 2024 y la núm. 457/2025 de 21 de abril de 2025, y acreditada la pérdida de valor del inmueble, según consta en los valores reflejados en los títulos de adquisición y transmisión inmueble (Valor de adquisición del inmueble el 31 de marzo de 2014: 2.447.911, 14 euros; Valor de transmisión el 8 de junio de 2017 de 500.000 euros), estamos ante una liquidación nula de pleno derecho, por la inconstitucionalidad de las normas que aplica y que se sitúa en el ámbito del supuesto para e/ que la STC 59/2017 declaró la inconstitucionalidad de los artículos 107.1 y 107.2.a) LHL.

QUINTO. - La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de 19 de diciembre de 2023 (Rec. Gas. 853/2023): reitera que la acción de nulidad de pleno derecho no está sujeta a plazo de prescripción, sin embargo, matiza que los efectos económicos derivados de la declaración de nulidad sí pueden verse limitados por la prescripción del derecho a la devolución de ingresos indebidos (cuatro años desde el ingreso, sin perjuicio de las posibles interrupciones de la prescripción) y en el mismo sentido se pronuncia la ya citada sentencia núm. 457/2025 de 21 de abril de 2025.

En el presente caso, aunque no se hubiese producido la interrupción de la prescripción por la presentación de la anterior solicitud de revisión el 15/12/2022 inadmitida el 21 de febrero de 2023 y dada por notificada el 04/03/2023, momento en que se reinició el cómputo para el plazo de prescripción de la solicitud de devolución de ingreso indebido (Art 68.3 de la LGT), al haber sido abonada la liquidación el 23/03/2021 y haberse presentado la solicitud de inicio del procedimiento que actualmente se tramita, el 7 de mayo de 2024, el obligado tributario estaría, en cualquier caso, dentro del plazo de cuatro años legalmente previsto en el artículo 66.c).

Conforme a lo anteriormente expuesto y en aplicación del artículo 32 de la Ley General Tributaria, con concordancia con los ya citados artículos 66.c) y 68.3, procedería la

correspondiente devolución de lo abonado por el obligado en pago de la liquidación y el correspondiente interés de demora devengado desde el 23/03/2021 hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución».

3. En el presente asunto, se considera que constituye un hecho indubitado, en virtud no solo de los informes emitidos por la Tesorería General del Ayuntamiento, anteriormente reproducidos, sino de la documentación incorporada al expediente, que, en el Decreto judicial dictado el 10 de octubre de 2013 y rectificado por errores materiales el 27 de enero de 2014 por el Juzgado de Primera Instancia, número 4, de San Bartolomé de Tirajana, con ocasión del procedimiento de ejecución hipotecaria número 1294/2012, en virtud del cual la empresa interesada adquirió el bien inmueble ya mencionado, en su totalidad, edificio de 36 viviendas situado en la esquina existente entre las calles (...) y (...) (El Doctoral) en el término municipal de Santa Lucía de Tirajana, se desglosa la cuantía total por la que se adquiere el bien inmueble de naturaleza urbana de la siguiente manera:

- 2.013.974,14 euros, en concepto de principal e intereses ordinarios.

- 353.955,96 euros, en concepto de intereses moratorios.

- 79.981,04 euros, en concepto de costas procesales.

A su vez, la empresa interesada vendió dicho inmueble, como un todo, es decir, solar y edificio en construcción (en su totalidad) conjuntamente, el 8 de junio de 20217, a la empresa denominada (...), constando en la escritura pública notarial de compraventa, que el precio total ascendía 500.000 euros.

Por tanto, como correctamente afirman la empresa interesada y la Administración, tanto en su solicitud inicial y posteriores alegaciones, como en la Propuesta de Resolución definitiva, resulta evidente que, en la transmisión del bien inmueble ya referida, como un todo, no se ha producido incremento de su valor, por lo que dicha operación -compraventa- no puede ser gravada con el IIVTNU.

4. En el presente asunto, se ha de tener en cuenta que este Consejo Consultivo en su Dictamen 725/2024, de 12 de diciembre, entre otros, relativo a un supuesto similar al que aquí nos ocupa, ha señalado que:

«Sentado lo anterior, ha de advertirse con carácter previo al análisis de los motivos alegados por la reclamante, como tantas veces se ha señalado por este Consejo Consultivo y por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, que la revisión de oficio supone el ejercicio de una facultad exorbitante por vicios especialmente graves, en cuya aplicación se ha de ser

riguroso, por implicar un conflicto entre dos principios generales del derecho: el principio de legalidad y el principio de seguridad jurídica. De aquí que no cualquier vicio jurídico permita acudir sin más a la revisión de oficio, sino que ella solo es posible cuando concurra de modo acreditado e indubitado un vicio de nulidad de pleno derecho de los legalmente previstos, cuyos presupuestos no pueden entenderse de manera amplia, sino restrictiva (Dictámenes de este Consejo 430/2017, de 14 de noviembre, 438 y 446/2016, de 27 de diciembre, 23/2017, de 24 de enero, 43/2017, de 8 de febrero, 79/2017, de 15 de marzo, que reiteran anteriores pronunciamientos de este Organismo en el mismo sentido).

La declaración de nulidad y sus motivos han de analizarse, pues, con carácter restrictivo, ya que la revisión de oficio no es en modo alguno un cauce para decidir cuestiones que debieron haber sido resueltas por las vías de impugnación ordinarias.

Esto es, la revisión de oficio es una vía excepcional que solo se puede utilizar cuando se den las causas tasadas previstas legalmente, entre las que no se encuentra expresamente contemplada como tal la declaración de inconstitucionalidad de la ley al amparo de la cual se hayan dictado los actos que se pretenden revisar. Por ello, sin perjuicio de que en algunos casos especiales puedan servir para reabrir una situación que pareciera consolidada, no podría emplearse para revisar las situaciones que no se puedan impugnar al amparo de los procedimientos generales de revisión previstos legalmente.

Así, la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2018 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª), ha señalado que «la finalidad que está llamada a cumplir la revisión de los actos nulos (...) es facilitar la depuración de los vicios de nulidad radical o absoluta de que adolecen algunos actos administrativos, con el inequívoco propósito de evitar que el transcurso de los breves plazos de impugnación de aquellos derive en su consolidación definitiva», ampliando las posibilidades impugnatorias «en equilibrio con la seguridad jurídica», doctrina también aplicable al presente supuesto.

5. Asimismo, en el referido Dictamen de este Consejo Consultivo se ha expuesto la doctrina jurisprudencial aplicable a supuestos como el que es objeto del presente Dictamen, en los siguientes términos:

«La revisión de oficio de actos nulos objeto del presente procedimiento viene derivada de la doctrina jurisprudencial emanada tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo en relación con el IIVTNU.

En este sentido, debemos hacer un recorrido por los diversos pronunciamientos emitidos al respecto:

a) En un primer momento, la STC 59/2017, de 11 de mayo, señaló:

«a) El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos no es, con carácter general, contrario al Texto Constitucional, en su configuración actual. Lo es únicamente en aquellos supuestos en los que somete a tributación situaciones inexpresivas de capacidad

económica, esto es, aquellas que no presentan aumento de valor del terreno al momento de la transmisión. Deben declararse inconstitucionales y nulos, en consecuencia, los arts. 107.1 y 107.2 a) LHL, «únicamente en la medida en que someten a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica» (SSTC 26/2017, FJ 7; y 37/2017, FJ 5).

b) Como apunta el Fiscal General del Estado, aunque el órgano judicial se ha limitado a poner en duda la constitucionalidad del art. 107 LHL, debemos extender nuestra declaración de inconstitucionalidad y nulidad, por conexión (art. 39.1 LOTC) con los arts. 107.1 y 107.2 a) LHL, al art. 110.4 LHL, teniendo en cuenta la íntima relación existente entre este último citado precepto y las reglas de valoración previstas en aquellos, cuya existencia no se explica de forma autónoma sino solo por su vinculación con aquel, el cual «no permite acreditar un resultado diferente al resultante de la aplicación de las reglas de valoración que contiene» [SSTC26/2017, FJ 6; y 37/2017, FJ 4 e)]. Por consiguiente, debe declararse inconstitucional y nulo el art. 110.4 LHL, al impedir a los sujetos pasivos que puedan acreditar la existencia de una situación inexpresiva de capacidad económica (SSTC 26/2017, FJ 7; y 37/2017, FJ 5).

c) Una vez expulsados del ordenamiento jurídico, ex origine, los arts. 107.2 y 110.4 LHL, en los términos señalados, debe indicarse que la forma de determinar la existencia o no de un incremento susceptible de ser sometido a tributación es algo que solo corresponde al legislador, en su libertad de configuración normativa, a partir de la publicación de esta sentencia, llevando a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (SSTC 26/2017, FJ 7; y 37/2017, FJ 5)».

b) A continuación, la STS 1163/2018, de 9 de julio, interpretando la sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017, de 11 de mayo, señaló:

«QUINTO
(...)

1.- Corresponde al obligado tributario probar la inexistencia de incremento de valor del terreno onerosamente transmitido. Y este extremo, no solo se infiere con carácter general del artículo 105.1 LGT, conforme al cual «quien haga valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo», sino que también, y en el ámbito concreto que nos ocupa, ha sido puesto de relieve por el Pleno del Tribunal Constitucional en el FJ 5 b) de la STC 59/2017, y admitido, incluso, por la Sección Primera de esta Sala en el Auto de admisión de 30 de octubre de 2017 (RCA 2672/2017). En el FJ 5 b) de la STC 59/2017 concluye, concretamente, el máximo intérprete de la Constitución, que «debe declararse inconstitucional y nulo el artículo 110.4 LHL, al impedir a los sujetos pasivos que puedan acreditar la existencia de una situación inexpresiva de capacidad económica (SSTC 26/2017, FJ 7, y 37/2017, FJ 5).”», precisión esta última de la que se infiere inequívocamente que es

al sujeto pasivo a quien, en un primer momento, le corresponde probar la inexistencia de plusvalía. Y esta premisa ha sido admitida también en la cuestión casacional que, con posterioridad al pronunciamiento del Tribunal Constitucional, fijó la Sección Primera de esta Sala en el Auto de admisión de 30 de octubre de 2017 , citado, en el que, presuponiendo que pesaba "sobre el legalmente considerado como sujeto pasivo la carga de acreditar la inexistencia de un aumento real del valor del terreno en la fecha de devengo del IIVTNU", consideró que tenía interés casacional objetivo la determinación de los medios concretos de prueba que debían emplearse para acreditar la concurrencia de esta última circunstancia.

2.- Para acreditar que no ha existido la plusvalía gravada por el IIVTNU podrá el sujeto pasivo (a) ofrecer cualquier principio de prueba, que al menos indiciariamente permita apreciarla , como es la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión que se refleja en las correspondientes escrituras públicas [cuyo valor probatorio sería equivalente al que atribuimos a la autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en los fundamentos de derecho 3.4 de nuestras sentencias de 23 de mayo de 2018 (RRCA núms. 1880/2017 y 4202/2017), de 5 de junio de 2018 (RRCA núms. 1881/2017 y 2867/2017) y de 13 de junio de 2018 (RCA núm. 2232/2017]; (b) optar por una prueba pericial que confirme tales indicios; o, en fin, (c) emplear cualquier otro medio probatorio ex artículo 106.1 LGT que ponga de manifiesto el decremento de valor del terreno transmitido y la consiguiente improcedencia de girar liquidación por el IIVTNU. Precisamente -nos interesa subrayarlo-, fue la diferencia entre el precio de adquisición y el de transmisión de los terrenos transmitidos la prueba tenida en cuenta por el Tribunal Constitucional en la STC 59/2017 para asumir -sin oponer reparo alguno- que, en los supuestos de hecho examinados por el órgano judicial que planteó la cuestión de inconstitucionalidad, existía una minusvalía.

3.- Aportada -según hemos dicho, por cualquier medio- por el obligado tributario la prueba de que el terreno no ha aumentado de valor, deberá ser la Administración la que pruebe en contra de dichas pretensiones para poder aplicar los preceptos del TRLHL que el fallo de la STC 59/2017 ha dejado en vigor en caso de plusvalía. Contra el resultado de la valoración de la prueba efectuada por la Administración en el seno del procedimiento tributario correspondiente, el obligado tributario dispondrá de los medios de defensa que se le reconocen en vía administrativa y, posteriormente, en sede judicial. En la vía contencioso-administrativa la prueba de la inexistencia de plusvalía real será apreciada por los Tribunales de acuerdo con lo establecido en los artículos 60 y 61 LJCA y, en último término, y tal y como dispone el artículo 60.4 LJCA, de conformidad con las normas del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

(...)

SÉPTIMO

Criterios interpretativos sobre los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del TRLHL, a la luz de la STC 59/2017.

Conforme a lo hasta aquí expuesto, y según ordena el artículo 93.1 LJCA, procede fijar la siguiente interpretación de los preceptos legales concernidos en este litigio:

1º) Los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL, a tenor de la interpretación que hemos hecho del fallo y del fundamento jurídico 5 de la STC 59/2017, adolecen solo de una inconstitucionalidad y nulidad parcial. En este sentido, son constitucionales y resultan, pues, plenamente aplicables, en todos aquellos supuestos en los que el obligado tributario no ha logrado acreditar, por cualquiera de los medios que hemos expresado en el fundamento de derecho Quinto, que la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título (o la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos), no ha puesto de manifiesto un incremento de su valor o, lo que es igual, una capacidad económica susceptible de ser gravada con fundamento en el artículo 31.1 CE (...) ».

c) Posteriormente, el Tribunal Constitucional vuelve a pronunciarse sobre esta cuestión en su Sentencia 182/2021, de 26 de octubre, en la que, en relación con el alcance y los efectos de la declaración de inconstitucionalidad y nulidad, señala lo siguiente:

« (...) Sobre la presente declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 TRLHL (RCL 2004, 602, 670) cabe realizar las siguientes precisiones:

A) Por un lado, la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 TRLHL supone su expulsión del ordenamiento jurídico, dejando un vacío normativo sobre la determinación de la base imponible que impide la liquidación, comprobación, recaudación y revisión de este tributo local y, por tanto, su exigibilidad. Debe ser ahora el legislador (y no este Tribunal) el que, en el ejercicio de su libertad de configuración normativa, lleve a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto para adecuarlo a las exigencias del art. 31.1 CE puestas de manifiesto en todos los pronunciamientos constitucionales sobre los preceptos legales ahora anulados, dado que a fecha de hoy han trascurrido más de cuatro años desde la publicación de la STC 59/2017 ("BOE" núm. 142, de 15 de junio). Como ya se recordó en la STC 126/2019, al tratarse de un impuesto local, corresponde al legislador estatal integrar el principio de reserva de ley en materia tributaria (arts. 31.3 y 133.1 y 2 CE) como medio de preservar tanto la unidad del ordenamiento como una básica igualdad de posición de los contribuyentes en todo el territorio nacional [STC 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 10 c)] y el principio de autonomía local (arts. 137 y 140 CE), garantizando con ello adicionalmente la suficiencia financiera de las entidades locales exigida por el art. 142 CE .

B) Por otro lado, no pueden considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, hayan sido decididas definitivamente

mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resolución administrativa firme. A estos exclusivos efectos, tendrán también la consideración de situaciones consolidadas (i) las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia y (ii) las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada ex art. 120.3 LGT a dicha fecha».

d) Finalmente, con fecha 26 de septiembre de 2022, el Tribunal Constitucional dicta la Sentencia 108/2022, en la que se pronuncia sobre la revisión de actos con fundamento en la STC 59/2017, de 11 de mayo, razonando lo siguiente:

« (...) a) Los efectos de la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal: de acuerdo con lo dispuesto en el art. 39.1 LOTC, las disposiciones consideradas inconstitucionales han de ser declaradas nulas, de manera que al efecto derogatorio previsto en el art. 164.1 CE aquel precepto orgánico le añade el de la "nulidad", que se traslada también, en virtud de lo dispuesto en el art. 40.1 LOTC, a los actos dictados en la aplicación de los preceptos expulsados del ordenamiento, en principio, con efectos ex tunc. Esto implica la posibilidad de su revisabilidad a través de los diferentes mecanismos existentes en el ordenamiento jurídico a disposición de los obligados tributarios salvo, de un lado, que hayan sido confirmados en "procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada" siempre que no sean "penales o contencioso-administrativos referentes a un procedimiento sancionador en que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad" (art. 40.1 LOTC); o, de otro, que este tribunal precise el sentido de su decisión limitando el alcance de aquella nulidad para dotarla exclusivamente de efectos ex nunc.

En efecto, a este Tribunal Constitucional no solo le compete el examen de la constitucionalidad de la ley sino también, "en la medida que ello sea necesario para precisar el sentido de su decisión, la determinación del alcance de su fallo" (STC 83/1984, de 24 de julio, FJ 5). La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional le ha dejado "la tarea de precisar" el alcance de la nulidad en cada caso, determinando "las situaciones consolidadas que han de considerarse no susceptibles de ser revisadas (...) por exigencia del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE)" (STC 45/1989, de 20 de febrero, FJ 11). Por consiguiente, "correspondiendo a este tribunal precisar los efectos de la nulidad" [STC 111/2016, de 9 de junio, FJ 8 f)], puede, de un lado, modular su alcance "para preservar no solo la cosa juzgada (...) sino también las posibles situaciones administrativas firmes" (SSTC 207/2014, de 15 de diciembre, FJ 5, y 143/2015, de 22 de junio, FJ 3), y de otro, limitar "la revisabilidad de los actos administrativos nulos" (STC 30/2017, de 27 de febrero, FJ 5), para que aquella declaración solo sea eficaz pro futuro, esto es, con efectos ex nunc [SSTC 60/2015, de 18 de marzo, FJ 6, y 111/2016, de 9 de junio, FJ 8 f)].

b) El alcance de la nulidad derivada de la inconstitucionalidad contenida en la STC 59/2017, de 11 de mayo: esta sentencia de este tribunal declaró la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4 TRLHL, en la medida en que sometían a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor. Y lo hizo ex origine [FJ 5 c)], esto es, con efectos ex tunc y sin introducir limitación alguna respecto de las situaciones eventualmente consolidadas. Con ello estaba habilitando a los obligados tributarios —ex art. 40.1 LOTC— a instar la devolución de las cantidades pagadas —a través de los instrumentos legalmente previstos para la revisión de los actos de naturaleza tributaria— en los supuestos de no incremento o de decremento en el valor de los terrenos de naturaleza urbana, en los que se habría producido el gravamen de "una renta ficticia" y, por tanto, se habrían sometido a tributación "situaciones de hecho inexpresivas de capacidad económica, lo que contradice frontalmente el principio de capacidad económica que garantiza el artículo 31.1 CE" (FJ 3).

Por su parte, la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo núm. 1163/2018, de 9 de julio (recurso de casación núm. 6226-2017), interpretó el alcance de la anterior declaración de inconstitucionalidad y nulidad, precisando, en lo que ahora interesa: de un lado, que "anulada y expulsada del ordenamiento jurídico la prohibición que tenían los sujetos pasivos de probar la inexistencia de los incrementos de valor (...), puede el obligado tributario demostrar que el terreno no ha experimentado un aumento de valor y, por ende, que no se ha producido el nacimiento de la obligación tributaria", mediante "cualquier principio de prueba que, al menos indiciariamente, permita apreciarla, como es la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión que se refleja en las correspondientes escrituras públicas", porque precisamente "fue la diferencia entre el precio de adquisición y el de transmisión de los terrenos transmitidos la prueba tenida en cuenta por el Tribunal Constitucional en la STC 59/2017 para asumir —sin oponer reparo alguno— que (...) existía una minusvalía", y, de otro, que "demostrada la inexistencia de plusvalía, no procederá la liquidación del impuesto (o, en su caso, corresponderá la anulación de la liquidación practicada o la rectificación de la autoliquidación y el reconocimiento del derecho a la devolución)"(fundamento de Derecho 5).

c) La revisión de los actos de aplicación de los tributos cuyas normas legales de cobertura han sido declaradas inconstitucionales y nulas: para poder concretar luego la eventual concurrencia de un error patente con trascendencia constitucional, es preciso ahora efectuar algunas precisiones desde el plano de la pura legalidad ordinaria. A tal fin, es importante recordar que la gestión de los tributos puede iniciarse mediante autoliquidaciones o por declaraciones (arts. 98.1 y 118.1 LGT). Las primeras son "declaraciones en las que los obligados tributarios, además de comunicar a la administración los datos necesarios para la liquidación del tributo y otros de contenido informativo, realizan por sí mismos las operaciones de calificación y cuantificación necesarias para determinar e ingresar el importe de la deuda tributaria" (art. 120.1 LGT). Las segundas, por su parte, son

"todo documento presentado ante la administración tributaria donde se reconozca o manifieste la realización de cualquier hecho relevante para la aplicación de los tributos" (art. 119.1 LGT), el cual dará lugar a una liquidación como "acto resolutorio mediante el cual el órgano competente de la administración realiza las operaciones de cuantificación necesarias y determina el importe de la deuda tributaria" (art. 101.1 LGT).

Cuando se declara la inconstitucionalidad y nulidad de una disposición legal, "el respeto a la Constitución debe regir en todo momento" (STC 70/2022, de 2 de junio, FJ 4), "lo que presupone la existencia de cauces de revisión" para lograr eliminar, en atención a lo querido por el art. 40.1 LOTC, todo efecto de la norma declarada inconstitucional (en sentido parecido, aunque respecto de las sanciones, SSTC 150/1997, de 29 de septiembre, FJ 5, y 39/2011, de 31 de marzo, FJ 5). A tal fin, los medios de revisión de los actos de aplicación de los tributos legalmente previstos en nuestro ordenamiento tributario de cara a la obtención de la devolución de las cantidades indebidamente ingresadas varían según se trate de autoliquidaciones (de los obligados tributarios) o de liquidaciones (de la administración tributaria): en el primer supuesto, podrá hacerse a través de los procedimientos especiales de revisión, concretamente, del de devolución de ingresos indebidos [arts. 32, 120.3 y 221.4, todos ellos de la LGT, y 14.1 a) TRLHL], que se podrá obtener "[e]n un procedimiento de rectificación de autoliquidación a instancia del obligado tributario" [art. 15.1 e) del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, en materia de revisión en vía administrativa]; en el segundo supuesto, podrá llevarse a efecto, si los actos no fuesen firmes, mediante el recurso de reposición (art. 223.1 LGT) y la reclamación económico-administrativa (arts. 226 y 235.1 LGT), salvo en materia de tributos locales (aunque la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, previó la existencia de un órgano especializado para el conocimiento y resolución de las reclamaciones sobre actos tributarios de competencia local, solo es de aplicación a los que tengan la consideración de "municipios de gran población"); y si fuesen firmes, a través de los procedimientos especiales de revisión, concretamente, mediante la revisión de actos nulos (art. 217 LGT) o la revocación de actos anulables (art. 219 LGT)».

e) En aplicación de esta doctrina constitucional, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en su reciente Sentencia 339/2024, de 28 de febrero, ha expuesto la siguiente doctrina, que revisa y modifica la doctrina jurisprudencial anterior sobre los efectos de la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 107.1 y 107.2.ª) y 110.4 del TRLHL:

«DÉCIMO. El juicio de la Sala.

Esta cuestión se examinó, ya se ha dicho en un conjunto de sentencias de esta Sala y Sección que se inician con las SSTS de 18 de mayo de 2020, y las demás citadas. No es preciso que nos extendamos ahora en la argumentación por la que se rechazó la posibilidad de

incardinar la nulidad de pleno derecho en los apartados del artículo 217.1 LGT, diferentes al apartado g) [esto es, los apartados a), b), c), d), e), y f) del art. 217.1 LGT] pues mantenemos las consideraciones que se hacen al respecto en esta doctrina jurisprudencial.

Sin embargo, si hemos de reconsiderar las razones por las que entonces argumentamos que el apartado g) del artículo 217.1 LGT no sería cauce idóneo para sustentar la revisión de oficio por nulidad de pleno derecho basada en la declaración de inconstitucionalidad de normas que determinan un elemento esencial del IIVTNU como es la base imponible.

En cuanto a la aplicabilidad del apartado g) del artículo 217.1 LGT, se dijo en la STS 436/2020, de 18 de mayo de 2020, cit., (FJ 6), y en las demás que siguen esta misma línea jurisprudencial, que no cabría articular la revisión de oficio de liquidaciones firmes por IIVTNU, aun en caso de inexistencia de incremento de valor de los terrenos. El artículo 217.1, apartado g), dispone que « (...) 1. Podrá declararse la nulidad de pleno derecho de los actos dictados en materia tributaria (...) en los siguientes supuestos: (...) g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal (...) ». En la STS 436/2020, de 18 de mayo, se consideró, al igual que en otras sentencias posteriores, que la declaración de inconstitucionalidad efectuada por la STC 59/2017 no podría habilitar este cauce de revisión de oficio y ello por cuanto, en una apretada síntesis de cuanto allí se razonó:

i) no existe precepto legal expreso que tipifique que la nulidad por inconstitucionalidad de una norma -que en este caso sería el art. 107.1 y 107.2.a) TRLHL- determine la nulidad de la liquidación tributaria que los ha aplicado cuando la misma haya ganado firmeza en vía administrativa

ii) no se consideró en esa línea jurisprudencial que el artículo 39.1 LOTC pudiera ser una norma suficiente a los efectos de la nulidad del acto, porque su mandato de nulidad se refiere a la declaración de inconstitucionalidad por extensión de otros preceptos, disposiciones o actos con fuerza de ley distintos a los que fueron objeto del proceso de inconstitucionalidad, no a los actos de aplicación; y

iii) la nulidad del acto tributario sería, a tenor de la declaración de inconstitucionalidad contenida en la STC 59/2017, también parcial, condicionada o limitada o, expresado de otro modo, no resultaría directamente del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, sino que exigiría una suerte de "reconstrucción" del acto de liquidación para verificar si, en efecto, se había producido o no el hecho imponible verificando la eventual existencia de incremento de valor de los terrenos.

Este planteamiento debe ser reconsiderado y, por las razones que exponemos a continuación, esta Sala modifica el criterio jurisprudencial hasta ahora mantenido.

En primer lugar, conviene destacar que la STC 182/2021 aporta una perspectiva nueva al examen de esta cuestión, pues a diferencia de la inconstitucionalidad declarada en la STC

59/2017, en el caso de la STC 182/2021, de 26 de octubre, se declara la inconstitucionalidad de los artículos 107.1, segundo párrafo, y 107.2.a) LHL con plenitud y sin condicionamiento alguno y, en consecuencia, ya no cabe afirmar que la nulidad no resulte directamente del pronunciamiento de inconstitucionalidad. Por tanto, buena parte del entramado argumental sobre las limitaciones que imponía la declaración de inconstitucionalidad efectuada en la STC 59/2017, por el carácter limitado y condicionado de la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 107.1 y 107.2.a) LHL, queda sin sustento alguno tras la STC 182/2021, de 26 de octubre. Aun así, esto nos remitiría nuevamente a la cuestión de la limitación de efectos temporales establecida en la STC 182/2021, y a esclarecer si, habida cuenta de tales limitaciones, esa declaración de inconstitucionalidad plena e incondicionada de los artículos 107.1, segundo párrafo y 107.2.a) LHL se puede proyectar sobre el examen de solicitudes de revisión de oficio ya iniciadas y pendientes de resolver al tiempo de dictarse la STC 182/2021, como es el caso que nos ocupa.

Pero más allá de ello -que tendría un efecto muy limitado-, consideramos que es necesario un nuevo examen de la cuestión de los efectos de la declaración de inconstitucionalidad de normas que han sido aplicadas en liquidaciones tributarias firmes, en aquellos casos en que el Tribunal Constitucional no ha introducido limitación alguna al régimen de efectos que se deriva de la Constitución y la LOTC.

Si bien se mira, el resultado de la doctrina jurisprudencial establecida en la STS 436/2020, de 18 de mayo, seguida hasta el momento por esta Sala y Sección, limita toda posibilidad de revisión de oficio de liquidaciones firmes con base en la declaración de inconstitucionalidad efectuada en la STC 59/2017, esto es, en los casos de liquidaciones que han gravado situaciones en las que no existía incremento del valor de los terrenos y que, por tanto, gravaron con un tributo inconstitucional una riqueza inexistente, más aún, ficticia. Aunque se admite que el Tribunal Constitucional no limitó en la STC 59/2017 los efectos de su declaración de inconstitucionalidad, ni incluyó entre las situaciones consolidadas ninguna otra distinta de las que previene el artículo 40.1 LOTC -procesos fenecidos por sentencias con fuerza de cosa juzgada-, y por tanto nada dijo de considerar intangibles las liquidaciones firmes, el resultado práctico es el mismo que si lo hubiera hecho. Y ello sobre la base de que el legislador ordinario no ofrece un cauce nítida y expresamente establecido para que esos actos firmes de aplicación de una norma inconstitucional pueden ser removidos. El resultado, en una primera aproximación basada en criterios no ya interpretativos, sino de pura lógica, no se puede calificar de coherente, pues si el Tribunal Constitucional no ha establecido límite alguno, distinto del que deriva de la Constitución y la LOTC para los efectos de su declaración de inconstitucionalidad, se está dando por buena una interpretación del ordenamiento jurídico que impide un efecto querido por la Constitución, la remoción de los actos que han aplicado una norma inconstitucional. Aunque en alguna medida la reparación de los efectos derivados de esta declaración de inconstitucionalidad se pueda encauzar a través de la vía de la responsabilidad patrimonial, no podemos obviar que esta posibilidad

tiene unos requisitos y presupuestos mucho más limitados que los de la revisión de oficio, y, sobre todo, que su naturaleza es sustancialmente diferente, por lo que no puede sustituir la posibilidad de la revisión de oficio, ni la existencia del remedio de la responsabilidad patrimonial debe influir en el análisis de la viabilidad de la revisión de oficio como medio para llevar a su pleno efecto las consecuencias de la declaración de inconstitucionalidad efectuada por el Tribunal Constitucional.

Esta doctrina jurisprudencial debe ser reconsiderada a partir del correcto alineamiento de los criterios interpretativos basados en la vinculación más fuerte con la Constitución. Los efectos que producen las sentencias de inconstitucionalidad es una cuestión que depende de la propia Constitución. Si del artículo 9.1 de la CE se desprende el principio de adecuación del ordenamiento jurídico a la Constitución, es obvio que solo ésta puede determinar los efectos de las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de normas de ordenamiento jurídico.

Los Jueces y Tribunales, señaladamente este Tribunal Supremo como órgano encargado de fijar los criterios interpretativos del ordenamiento jurídico a través de su jurisprudencia, deben interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico bajo un principio que consideramos claro, aunque a partir de determinadas declaraciones de inconstitucionalidad con limitación de efectos, especialmente en el ámbito tributario, se haya llegado a instaurar un estado de opinión que ha dado por sentado que la regla general son los efectos ex nunc de la declaración de inconstitucionalidad. Lo que la Constitución establece, y esa es la regla general, es eliminar, en todo lo posible, los efectos aplicativos de una norma que haya sido declarada inconstitucional. No obstante, la propia Constitución puede fundamentar que la tutela de principios establecidos en la propia constitución justifique la limitación de efectos a la declaración de inconstitucionalidad, y esto es lo que hace el Tribunal constitucional cuando establece limitaciones de efectos, pero cuando no lo hace, lo que debe regir es la regla general.

La declaración de inconstitucionalidad, tal y como quiere el artículo 161.1º a) y el artículo 164.1 CE, tiene efectos ex tunc y el efecto que acarrea es, con carácter general, el de la nulidad, tal y como precisa el artículo 39.1 LOTC. Nulidad con efectos ex tunc que no tiene más limites que la intangibilidad de las situaciones resueltas por sentencias firmes con fuerza de cosa juzgada que hubieren hecho aplicación de la norma inconstitucional, y las limitaciones que pudiera introducir la sentencia que declare de inconstitucionalidad que, en el caso de la STC 59/2017, son inexistentes. Es a partir de esta premisa como debe ser interpretado el conjunto del ordenamiento jurídico.

Esta posición, por otra parte, tiene un sólido precedente en una consistente doctrina jurisprudencial elaborada por esta Sala en otros casos de declaración de inconstitucionalidad, sin limitación de efectos, de normas tributarias. En esta línea, cabe

citar como representativa la STS de 16 de diciembre de 2010 (rec. casación 6163/2007), que, con cita de abundantes sentencias de esta Sala y Sección, que reitera, se pronuncia a propósito de la declaración de inconstitucionalidad del "gravamen complementario "de la Tasa Fiscal del Juego, que declaró explícitamente el carácter ex tunc de la declaración de inconstitucionalidad de las normas y sus efectos retrospectivos. Es cierto que, como se afirma en la STS 436/2020, de 18 de mayo, cit., esta doctrina jurisprudencial, expresada entre otras en nuestra STS de 16 de diciembre de 2010 se pronuncia dentro de un marco legislativo sobre la devolución de ingresos indebidos de naturaleza tributaria distinto al actual, concretamente el art. 155 de la Ley General Tributaria 230/1963 y el Real Decreto 1163/1990, de 21 de septiembre por el que se regulaba el procedimiento para la devolución de ingresos indebidos, que ciertamente eran mucho menos detallados que la regulación actual de la revisión de oficio contenida en el art. 217 LGT. Pero ello no puede hacernos olvidar que la cuestión de fondo que nos ocupa no se ha afectado ni modificado por la legislación ordinaria, y no podría serlo, ni lo ha sido, pues el marco de examen de esta cuestión es la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Lo que en ningún caso establece el artículo 217.1 LGT es que los actos firmes tributarios que hubieren aplicado una norma declarada inconstitucional queden excluidos del cauce de la revisión de oficio por nulidad de pleno derecho. Por tanto, los distintos motivos que establece para conseguir la remoción de los actos nulos, y en particular el del apartado g), se han de interpretar bajo el mandato de alcanzar el pleno cumplimiento de los efectos queridos por la Constitución para las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de una norma. Es la legislación ordinaria la que ha de ser interpretada desde los mandatos y exigencias de la Constitución y no a la inversa.

Desde esta perspectiva que impone la propia Constitución, y el principio de adecuación a la misma de todo el ordenamiento jurídico, que resulta de su artículo 9.1, los límites que impone el artículo 40.1 LOTC deben ser entendidos como la expresión de un mandato único y expreso, con su vertiente positiva y negativa: la limitación tan solo cobra sentido con relación a un mandato positivo, el de plenitud de remoción de efectos de las leyes inconstitucionales. Cuando el artículo 40.1 LOTC, en conformidad con los artículos 161.1.ª) y 164.1 CE, salvaguarda de los efectos de la declaración de inconstitucionalidad a aquellas situaciones consolidadas de aplicación de la norma inconstitucional que hayan sido resueltas en sentencias con fuerza de cosa juzgada, está afirmando que el alcance general de esa declaración de inconstitucionalidad es la remoción de efectos en todo lo que no esté comprendido en tal salvaguarda. Dicho de otra forma, precisamente porque es una limitación a un mandato positivo, la regla general es la que impone este último, expresado en el artículo 161.1º a) en relación al artículo 164.1, ambos de la CE, que exigen e imponen los efectos ex tunc de la declaración de inconstitucionalidad, sin deferir tales efectos a ninguna intermediación legislativa, de forma que toda situación que no esté cubierta por los límites negativos que impone el artículo 164.1 CE-sentencias con cosa juzgada que hayan hecho aplicación de la norma inconstitucional, dejando a salvo los casos de reducción de penas o

sanciones-, podrá quedar afectada por los efectos de la declaración de inconstitucionalidad, salvo que el propio Tribunal Constitucional, al declarar la inconstitucionalidad de la norma, amplíe el ámbito de situaciones inmunes a los efectos de aquella declaración.

Esta interpretación que resulta del conjunto normativo Constitución - Ley Orgánica del Tribunal Constitucional-, fue expuesta ya en nuestra STS de 10 de julio de 2023, cit., en la que destacamos que el propio Tribunal Constitucional ha establecido, entre otras, en la STC 60/2015, de 18 de marzo, pero también en la STC 182/2021, de 26 de octubre, que los límites que establece el artículo 40.1 LOTC en relación a los artículos 161.1º a) y 164.1 CE constituyen un mínimo, que puede ser ampliado en aras de otros principios constitucionales, señaladamente el de seguridad jurídica (STC 126/2019, de 31 de octubre). En la STC 60/2015, de 18 de marzo, se afirma la excepcionalidad de la limitación de los efectos de las sentencias de declaración de inconstitucionalidad para las situaciones pro-futuro, que define como los « (...) nuevos supuestos o con los procedimientos administrativos y procesos judiciales donde aún no haya recaído una resolución firme (...) » y en análogos términos la STC 126/2019, de 31 de octubre (FJ 6ª). Conviene advertir que este marco interpretativo no resulta alterado - no desde luego a los efectos que ahora nos ocupan- por la previsión del artículo 32.6, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuando establece que « (...) [l]a sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o declare el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea producirá efectos desde la fecha de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado" o en el "Diario Oficial de la Unión Europea", según el caso, salvo que en ella se establezca otra cosa (...) ». Se trata de una norma destinada a configurar el régimen de la responsabilidad patrimonial derivado de la declaración de inconstitucionalidad, que no es la pretensión que enjuiciamos, donde lo que está en cuestión es en qué medida es aplicable a la propia actuación administrativa impugnada el efecto de declaración de inconstitucionalidad.

El mandato del artículo 161.1º a) en relación con el artículo 164.1, ambos de la CE, no requiere, ya lo hemos dicho, de desarrollo normativo alguno, y, desde luego, no admite que ninguna ley limite los efectos de la inconstitucionalidad queridos por la Constitución, y desde luego los artículos 39.1 y 40.1 LOTC no lo hacen. Por tanto, no cabe sostener una interpretación jurisprudencial que condujera al resultado de limitar aquello que la Constitución impone, y por ello, cuando el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad de una ley y al mismo tiempo no determina nada sobre los efectos temporales de esa declaración, la regla aplicable es la retroactividad, la remoción de efectos, y ese efecto se reconduce a la categoría de nulidad.

Aunque el Tribunal Constitucional ha declarado en diferentes ocasiones que no siempre la declaración de inconstitucionalidad implica la de nulidad de la norma inconstitucional, y tal y como expone, entre otras, la STC 45/1989 al precisar que « (...) [n]i esa vinculación entre inconstitucionalidad y nulidad es, sin embargo, siempre necesaria, ni los efectos de la

nulidad en lo que toca al pasado vienen definidos por la Ley, que deja a este Tribunal la tarea de precisar su alcance en cada caso, dado que la categoría de la nulidad no tiene el mismo contenido en los distintos sectores del ordenamiento (...) », no por ello deja de ser cierto que la regla general que se deriva del artículo 164.1 CE y del artículo 39.1 LOTC es la retroactividad, la eficacia ex tunc. Y ese efecto de nulidad es incuestionable en el caso que nos ocupa, pues la declaración de inconstitucionalidad efectuada por la STC 59/2017 es inequívoca al proclamar la inconstitucionalidad y nulidad ex origine de las normas objeto de la misma, tal y como precisa la propia STC 59/2017, que declara « (...) inconstitucionales y nulos, en consecuencia, los arts. 107.1y 107.2 a) LHL, «únicamente en la medida en que someten a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica» (SSTC 26/2017, FJ 7; y 37/2017, FJ 5) (...) », así como « (...) inconstitucional y nulo el artículo 110.4 LHL, al impedir a los sujetos pasivos que puedan acreditar la existencia de una situación inexpresiva de capacidad económica (SSTC 26/2017, FJ 7, y 37/2017, FJ 5) (...) » y todo ello, remarcando que quedan « (...) expulsados del ordenamiento jurídico, ex origine, los arts. 107.2 y 110.4 LHL, en los términos señalados (...) » (FJ 5, a, b y c). Esta calificación de nulidad, como destaca la STC 108/2022, se añade por el artículo 39.1 LOTC al efecto derogatorio previsto en el artículo 164.1 CE, y como precisa la referida STC 108/2022 « (...) [ese efecto] de la «nulidad», que se traslada también, en virtud de lo dispuesto en el art. 40.1 LOTC, a los actos dictados en la aplicación de los preceptos expulsados del ordenamiento, en principio, con efectos ex tunc (...) ».

Es cierto que la calificación de nulidad de un acto puede tener diversos significados y efectos según el sector del ordenamiento jurídico que consideremos, pues no es una categoría homogénea. No obstante, lo que resulta incuestionable es que el efecto general que quiere la Constitución para la declaración de inconstitucionalidad de una norma es, explícitamente, la privación de efectos de esta desde el momento mismo del inicio de su aplicación, salvo determinados límites ya expuestos. Y ese efecto se corresponde con la categoría de la nulidad de pleno derecho de la legislación administrativa y tributaria. Por supuesto podrán existir casos en los que inconstitucionalidad y nulidad no vayan unidos, pero no es este uno de ellos, por las razones ya expuestas.

A partir de estas premisas, es preciso recordar que el artículo 87.1 LOTC proclama que « (...) [t]todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva (...) », y además, específicamente, los Jueces y Tribunales « (...) interpretarán y aplicarán las leyes y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos (...) », según dispone el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, Orgánica del Poder Judicial. La plenitud de efectos queridos por la Constitución al regular los efectos de las sentencias de inconstitucionalidad no se puede enfocar, ya se ha dicho, desde los límites aparentes de las previsiones del legislador, sino al contrario, es obligado interpretar y si es necesario,

adaptar en lo posible esos límites al pleno cumplimiento y respeto a la Constitución. Ello requiere, en consecuencia, una interpretación del artículo 217.1.g) LGT conforme a la Constitución, en el sentido de que los artículos 39.1 y 40.1 LOTC en relación a los artículos 161.1.ª) y 164.1 CE, determinan la nulidad de los actos de aplicación de las normas que hubieren sido declaradas inconstitucionales, salvo los límites que imponen estos preceptos y los que haya establecida la propia sentencia que declare la inconstitucionalidad, y que tal nulidad puede hacerse valer a través de la vía de revisión de oficio, conforme al artículo 217.1.g) LGT, sin perjuicio de que existirán casos en los que los actos de aplicación puedan también incardinarse, adicionalmente, en algún otro supuesto de nulidad de pleno derecho previstos en alguno de los demás apartados del artículo 217.1 LGT, por ejemplo, por haber vulnerado derechos fundamentales susceptibles de amparo (apartado a).

También debemos precisar que no cabe excluir que, en determinados casos, el alcance de la declaración de inconstitucionalidad no deba extenderse a los actos de aplicación, bien porque se haya declarado la inconstitucionalidad sin nulidad, o porque, hipotéticamente los actos, aun afectados por la norma inconstitucional, puedan tener otra cobertura normativa. Pero no es el caso de los efectos de la declaración de inconstitucionalidad efectuada en la STC 59/2017, en relación con la situación objeto del litigio.

Por consiguiente, concluimos que los artículos 39.1 y 40.1 LOTC contienen ese mandato positivo que ya impone la propia Constitución en sus artículos 161.1º a)en relación al 164.1, de remoción de los efectos de una norma declarada inconstitucional y comportan la consideración de nulos de pleno derecho para los actos de aplicación de aquella norma inconstitucional, y que estos preceptos legales constituyen una vía suficiente, esto es, son la norma expresa a que se remite el artículo 217.1.g) LGT, para aplicar el cauce de la revisión de tales actos nulos de pleno derecho por razón de la inconstitucionalidad de la norma de cobertura, con los efectos que prevé el artículo 217 LGT.

Esta conclusión también es aplicable en el caso de la declaración de inconstitucionalidad efectuada en la STC 59/2017, pese a los singulares términos en que se pronuncia el Tribunal Constitucional al proclamar que los artículos 107.1 y 107.2.a) LHL son inconstitucionales únicamente en la medida en que someten a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica. Cuando se ha afirmado que la declaración de inconstitucionalidad efectuada en la STC 59/2017es "parcial", como se dijo en nuestra STS 1163/2018, de 9 de julio (FJ 4.1), expresión que el propio Tribunal Constitucional también utiliza en la STC 126/2019 « (...) en coherencia con la declaración parcial de inconstitucionalidad que hizo la STC 59/2017 (...) » (FJ 5), lo que realmente se afirma es que resultan inconstitucionales ante unos determinados supuestos de aplicación, esto es, « (...) únicamente en la medida en que someten a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica». Por tanto, no se trata de que el texto de estos preceptos sea en parte inconstitucional, sino que lo es solo cuando se aplican a determinados supuestos, aquellos en los que no existe manifestación de capacidad

económica. Es cierto que es una formula compleja, que se aproxima bastante a la de las sentencias interpretativas del Tribunal Constitucional, pero que, sin embargo, no permite la pervivencia de la norma inconstitucional en todo caso, aunque con una determinada interpretación, que es el efecto característico de las sentencias interpretativas. Por consiguiente, es una fórmula de declaración de inconstitucionalidad que impide la aplicación de la norma inconstitucional a determinados supuestos, y siempre que concurran tales supuestos, estaremos ante un resultado contrario a la Constitución, también en el acto de aplicación. Ahora bien, que ello requiera una labor de indagación para determinar si la aplicación de la norma se ha hecho en un supuesto en que resulta inconstitucional, no implica que en tales casos ceda la plenitud del mandato de remoción de efectos de la norma inconstitucional.

La fase de admisión de la solicitud de revisión de oficio permite constatar, sin dificultad alguna, si la solicitud de revisión de oficio se refiere a un acto de aplicación que operó sobre aquellos supuestos que no quiso afectar la STC 59/2017 -aquellos en los sí existió un incremento del valor de los terrenos- e inadmitir la revisión de oficio cuando manifiestamente no concurra la nulidad de pleno derecho del acto de aplicación. Por otra parte, cualquier situación que suscite dudas sobre si existió o no aplicación de la norma a un supuesto en el que resultaría inconstitucional -inexistencia de incremento de valor de los terrenos en la transmisión gravada- puede resolverse en el curso del propio procedimiento de revisión de oficio, sin que ello suponga una reconstrucción de la fase de gestión tributaria, sino sencillamente la verificación de si concurre el supuesto para el que la STC 59/2017 declaró que la aplicación de los artículos 107.1 y 107.2.a) LHL es inconstitucional y nula. Si la situación no concurre con la suficiente evidencia, la revisión de oficio deberá ser rechazada.

Hay que advertir que al resolver sobre la revisión de oficio se deben ponderar todos los intereses concernidos, y, en especial, si ha existido afectación sustancial de principios constitucionales por el acto firme de aplicación de la norma declarada inconstitucional. En el caso de las liquidaciones por IIVTNU que hubieren gravado transmisiones en las que no haya existido incremento del valor del suelo, no se puede obviar que no solo se trata de actos nulos, sino que, además, son actos que han producido una lesión efectiva de un principio de rango constitucional, el de capacidad económica como fundamento y límite de la obligación de contribuir al sostenimiento de las cargas públicas, y han vulnerado de manera real y efectiva la prohibición de confiscatoriedad del artículo 31.1 CE, por lo que el restablecimiento del pleno respeto a la Constitución exige la posibilidad de abrir el cauce de revisión de tales actos, para impedir la perpetuación de una lesión de estos valores constitucionalmente protegidos. Por el contrario, no existe ningún interés jurídico digno de protección que se oponga a la revisión de oficio, ni lo reclama el principio de seguridad jurídica, pues la seguridad jurídica precisamente se garantiza a través de la remoción de efectos de los actos que, de otra manera, perpetuarían una lesión de principios constitucionales protegidos en el artículo 31.1 CE. Por otra parte, como es característico de

la potestad de revisión de oficio, deberá ponderarse el tiempo transcurrido desde que se produjo el ingreso de la cantidad liquidada por el acto nulo de pleno derecho hasta que se insta la revisión.

UNDÉCIMO. - Fijación de la doctrina jurisprudencial.

Todo ello nos lleva a establecer como doctrina jurisprudencial, en los términos que resultan de los anteriores fundamentos jurídicos, que la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1 y 107.2.ª) y 110.4 de la LHL, efectuada por la STC 59/2017, de 11 de mayo, traslada los efectos de nulidad de estas normas inconstitucionales a las liquidaciones tributarias firmes por Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que, con aplicación de dichas normas inconstitucionales, hubieran determinado una ficticia manifestación de capacidad económica, y sometido a gravamen transmisiones de inmuebles en las que no existió incremento del valor de los terrenos, con vulneración del principio de capacidad económica y prohibición de confiscatoriedad proclamados en el artículo 31.1 CE. Estas liquidaciones firmes pueden ser objeto de revisión de oficio a través del procedimiento previsto en el artículo 217 Ley General Tributaria, por resultar de aplicación el apartado g) del apartado 1, en relación con lo dispuesto en los artículos 161.1.ª) y 164.1 CE y 39.1 y 40.1 LOTC, todo ello con los límites previstos en los artículos 164.1 CE y 40.1 LOTC, que impiden revisar los procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que se haya hecho aplicación de las normas declaradas inconstitucionales.

Con esta doctrina jurisprudencial revisamos y modificamos la establecida en las sentencias de esta Sala y Sección de 18 de mayo de 2020, números 435/2020 (rec. 1665/2019 - ECLI:ES:TS: 2020:973), 436/2020 (rec. 2596/2019 - ECLI:ES:TS: 2020:970) y 454/2020 (rec. cas. 1068/2020 – ECLI ES:TS: 2020:984), y las demás que las reiteran».

Esta doctrina es aplicable al presente asunto y en la actualidad se sigue manteniendo por el Tribunal Supremo, tal y como evidencia la reciente Sentencia número 457/2025, de 21 de abril, de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2.ª, de dicho Tribunal, a la que se hace mención expresa en la Propuesta de Resolución definitiva, referida con anterioridad.

6. Por otro lado, se ha de señalar que el art. 217 LGT guarda silencio en cuanto al límite temporal para ejercer las facultades de revisión de oficio, resultando de aplicación los límites establecidos en el art. 213 de la misma Ley, y rigiendo como derecho supletorio el art. 110 LPACAP, que dispone, a tales efectos, que la revisión de oficio no podrá ser ejercitada «*cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes*».

Pues bien, la interesada alegó sobre ello que:

«El derecho a solicitar la devolución no está prescrito, puesto que el plazo de prescripción fue interrumpido con la presentación de reclamación anterior, en base a lo establecido en el artículo 68.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que regula la Interrupción de los plazos de prescripción del derecho al que se refiere el párrafo c) del artículo 66 de la indicada ley (El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías):

Artículo 68. Interrupción de los plazos de prescripción.

(...)

3. El plazo de prescripción del derecho al que se refiere el párrafo c) del artículo 66 de esta Ley se interrumpe:

a) Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario que pretenda la devolución, el reembolso o la rectificación de su autoliquidación.

b) Por la interposición, tramitación o resolución de reclamaciones o recursos de cualquier clase.

(...)

6. Producida la interrupción, se iniciará de nuevo el cómputo del plazo de prescripción, salvo lo establecido en el apartado siguiente.

(...)

Por lo que, la presentación de escritos anteriores y resoluciones de esta Administración, con la intención de que la plusvalía impugnada fuera declarada nula y devuelto el importe ingresado indebidamente, dado que fue objeto de una transmisión con ausencia de incremento del valor de los terrenos y, en consecuencia, del hecho imponible del IIVTNU, han interrumpido la prescripción y estamos dentro del plazo para volver a solicitar la nulidad de pleno derecho y devolución de ingresos indebidos».

La Administración no considera prescrito dicho derecho, por las razones expuestas en la Propuesta de Resolución, reproducidas anteriormente, lo cual se efectúa en coherencia con los antecedentes de hecho que obran en el informe de la Tesorera municipal, ya mencionado. En el mismo consta que el pago de la deuda tributaria se produjo el 23 de enero de 2021, se solicitó la tramitación de una primera revisión de oficio el 15 de diciembre de 2022, inadmitiéndose el 21 de febrero de 2023 y la solicitud que aquí nos ocupa es de 7 de mayo de 2024, lo que determina que no se ha producida dicha prescripción.

7. Por todo lo expuesto, se considera acreditada la concurrencia de la causa de nulidad prevista en el art. 217.1.g) LGT, y, en consecuencia, procede la revisión de oficio y consecuente declaración de nulidad del acto liquidatario impugnado, con el efecto económico declarado en la Propuesta de Resolución.

C O N C L U S I Ó N

La Propuesta de Resolución por la que se estima la solicitud de declaración de nulidad absoluta de la liquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, identificada con el número 201015530, acordada en virtud del Decreto 4780/2020, de 22 de julio, es conforme a Derecho por los motivos expuestos en el Fundamento IV de este Dictamen, siendo procedente la revisión de oficio que se pretende por la interesada.